

INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2019

BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Bolivia es una república constitucional multipartidista con un presidente y una legislatura bicameral elegidos. Después de las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de octubre, estropeadas por el fraude y la manipulación, el Tribunal Electoral declaró a Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), ganador el 25 de octubre. Después de semanas de protestas por los resultados electorales, el 10 de noviembre, el entonces presidente Morales presentó su renuncia y huyó a México al día siguiente. El 12 de noviembre, después de las renunciaciones masivas de ex funcionarios del partido gobernante en la línea de sucesión, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió la presidencia de forma transitoria; el mismo día, el Tribunal Constitucional aprobó aquello como una sucesión constitucionalmente válida. El 24 de noviembre, la presidenta de transición, Añez, firmó un proyecto de ley multipartidista que detalla un proceso para realizar futuras elecciones que efectivamente vuelve a imponer límites al período de mandato y prohíbe la participación de Morales.

La policía nacional, bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno, tiene la responsabilidad principal de la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden dentro del país, pero las fuerzas militares, bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, pueden ser llamadas para ayudar en situaciones críticas. Los funcionarios de migración dependen del Ministerio de Gobierno, y la policía y los militares comparten las responsabilidades de aplicación de la ley en las fronteras. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

El entonces presidente Morales había invitado a observadores y expertos técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a observar y luego auditar las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El equipo de auditoría de la OEA encontró manipulación intencional y dolosa y graves irregularidades en la administración de las elecciones. El equipo también encontró casos de manipulación de servidores de computadoras electorales y deficiencias en la cadena de custodia de las actas de conteo de votos que hicieron "imposible validar" los resultados oficiales. Las protestas masivas que comenzaron después de que se anunciaron los resultados electorales

iniciales aumentaron gradualmente en todo el país, enfrentando a los partidarios de Morales contra aquellos que exigían una nueva elección. Los disturbios civiles se volvieron rápidamente violentos y salieron de control, lo que llevó a un estimado de 36 muertes, todas las cuales fueron investigadas con fines de atribución de los autores, así como a más de 800 heridos, incendios provocados y cierres de carreteras en todo el país.

Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: informes de tortura por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; detención arbitraria; graves problemas relacionados con la independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, de prensa y otros medios, incluida la violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del estado y la censura; interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación; corrupción en todos los niveles de gobierno; trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado; delitos relacionados con la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y uso del trabajo infantil. El grado al cual estos abusos ocurrieron varió bajo las administraciones de Morales y Áñez.

En algunos casos el gobierno tomó medidas para procesar a los miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios de gobierno que cometieron abusos, pero la aplicación desigual de la ley y un sistema judicial disfuncional condujeron a la impunidad.

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluyendo ser libre de:

a. Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales o políticamente motivados

No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales antes de las elecciones del 20 de octubre. En el período inmediatamente posterior a las elecciones presidenciales, ocurrieron múltiples muertes. El 18 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el gobierno de transición había firmado un acuerdo para crear un mecanismo para apoyar la investigación de los actos de violencia y violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Subsiguientemente, se creó un grupo para investigar los acontecimientos por un período de seis meses, que podría extenderse por acuerdo de las partes durante el tiempo que sea necesario para

cumplir su misión. El grupo debía compartir los resultados parciales y finales de su investigación y recomendaciones con el gobierno y preparar un informe público final de su trabajo. La CIDH debía hacer un seguimiento del informe final y las recomendaciones del grupo.

Activistas de derechos humanos, organizaciones internacionales y medios locales pidieron específicamente que se investigaran los incidentes ocurridos en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, y en la planta de combustible de Senkata en la ciudad de El Alto el 19 de noviembre. Los informes iniciales de la CIDH indicaron que nueve personas fueron asesinadas en cada incidente. Medios locales y grupos de derechos humanos informaron cifras dispares de muertes y atribuyeron la violencia a diferentes actores. Al 31 de diciembre, no se había llegado a conclusiones definitivas sobre ninguno de los incidentes.

El subteniente de policía Cristian Casanova Condori fue condenado por matar a Jonathan Quispe, un estudiante de la Universidad Pública de El Alto, durante las protestas de mayo de 2018. El 31 de mayo, fue sentenciado a cinco años de prisión.

El 17 de julio, cuatro de los 16 mineros acusados inicialmente por el asesinato del año 2016 del entonces viceministro del interior Rodolfo Illanes fueron declarados culpables y condenados a cinco años de prisión.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por parte o en nombre de autoridades gubernamentales.

c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o denigrantes

La constitución prohíbe todas las formas de tortura, coerción y violencia física y emocional, pero hubo informes de que funcionarios del gobierno las emplearon. El código penal solo aplica penas mínimas para las personas condenadas por tortura, pero ningún funcionario público ha sido declarado culpable del delito.

Una organización no gubernamental (ONG) contra la tortura declaró que se recibieron 20 casos de tortura estatal de enero a noviembre. Varias ONG acusaron al Servicio para la Prevención de la Tortura del Ministerio de Justicia de no haber denunciado sistemáticamente la tortura por parte del personal policial y militar, que la empleó con mayor frecuencia. Las ONG informaron que las investigaciones policiales se basaron en gran medida en la tortura para

obtener información y extraer confesiones. Según los informes, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a las instalaciones policiales o los mantenían detenidos.

Según los informes de ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, las formas más comunes de tortura contra los detenidos incluyen violación, violación grupal por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gases lacrimógenos improvisadas y descargas eléctricas con pistolas paralizantes, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia.

El fin de semana del 10 de febrero, el recluso Omar Chuima Quispe murió en la prisión de San Pedro en La Paz. Inmediatamente antes de su muerte, los guardias de la prisión lo metieron en un pozo de agua como castigo por no acudir al llamado de la lista. El informe sobre las causas de la muerte emitido por el director de la prisión declaró que murió después de golpearse la cabeza en una caída; sin embargo, el informe forense declaró que murió por asfixia mecánica por inmersión y trauma en la cabeza. En entrevistas con ONG y medios de comunicación, los reclusos se negaron a hablar sobre la muerte de Quispe y explicaron que "había un pacto" para no hablar sobre el incidente. Una ONG que observó las condiciones de los reclusos declaró que esto no era inusual. A diferencia de 2018, los prisioneros se abstuvieron de denunciar abusos por temor a represalias de los guardias; además, creían que sus informes sobre abusos no tenían consecuencias disciplinarias para los guardias ni cambios en su condición. No hubo informes de que los guardias de la prisión responsables de este incidente fueran castigados o reprendidos por sus acciones.

Dentro de las fuerzas armadas, la tortura y el maltrato ocurrieron tanto para castigar como para intimidar a los conscriptos para que se sometieran. Los oficiales militares regularmente abusaron verbalmente de los soldados por infracciones menores y por lo que percibieron como desobediencia.

En agosto, una ONG que aboga por mujeres y personas transgénero que trabajaban en el comercio sexual declaró que las trabajadoras sexuales sufrieron abusos sexuales o físicos durante encuentros con agentes de policía. Un estudio de 2017 señaló que los derechos de las trabajadoras sexuales eran fáciles de violar porque ninguna ley específica las protege, a pesar de que la prostitución es legal.

Condiciones de los centros penitenciarios y de detención

Las cárceles estuvieron superpobladas, con fondos insuficientes y en malas condiciones, lo que dio por resultado condiciones difíciles y potencialmente mortales. La violencia fue generalizada debido a la inadecuada seguridad interna.

Condiciones físicas: La población carcelaria fue más de tres veces superior a la capacidad diseñada. Según el Informe sobre el Estado de la Justicia de 2018 de la Plataforma Ciudadana para el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, había 51 cárceles con capacidad para albergar a 5.805 reclusos. A septiembre de 2018, había 19.159 personas en prisión. La prisión de Montero, con una capacidad diseñada para 70 personas, albergaba a 430, incluyendo 33 mujeres. Los 430 reclusos compartieron tres baños. Aproximadamente 80 reclusos dormían en turnos rotativos de seis horas en la porción del "patio" al aire libre de la instalación. En algunas instalaciones, hombres y mujeres compartieron dormitorios.

Aproximadamente el 68 por ciento de todos los prisioneros varones y el 74 por ciento de las prisioneras estaban en prisión previa al juicio (preventiva). En la prisión de Montero, el 85 por ciento de los detenidos aún no había sido juzgado. Además, muchos prisioneros permanecieron encarcelados más allá de la pena máxima permitida por el delito por el cual habían sido condenados.

Cárceles de mujeres funcionaron en La Paz (dos), Trinidad, Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa y Cochabamba. Hombres y mujeres compartieron instalaciones para dormir en la prisión de Morros Blancos en Tarija, en la prisión de Montero en Santa Cruz, en la prisión de Riberalta en Beni y en la prisión de Oruro en Oruro. En otras instalaciones, hombres y mujeres tuvieron dormitorios separados pero se mezclaron durante el día. Las reclusas experimentaron acoso y asalto sexual de forma regular, y algunas fueron obligadas a pagar tarifas de extorsión para no ser víctimas de violación. Si bien los observadores notaron que la violencia contra las mujeres era desenfrenada, denunciaron que existía una cultura de silencio que suprimió las denuncias de violencia de género debido al temor a represalias. Se registraron un total de 100 acusaciones de violación por parte de guardias durante los primeros tres meses del año en tres prisiones rurales (Rurrenabaque, Reyes y Santa Rosa). Los observadores de las ONG estimaron que esto representaba

una pequeña fracción de las violaciones perpetradas por guardias en las cárceles de todo el país.

Aunque la ley permite que niños de hasta seis años vivan con un padre encarcelado en "condiciones seguras y reguladas", menores de hasta 12 años residieron en centros de detención con padres encarcelados, a pesar de las condiciones inseguras, a menudo porque los padres carecían de medios de vida alternativos viables debido a la pobreza o a limitaciones familiares. A partir de mayo de 2018, los menores de seis años o menos solo pudieron ingresar en las cárceles para mujeres. A los menores no se les permitió vivir en centros de detención para hombres.

La ley establece la edad de detención juvenil entre los 14 y 16 años y exige que los delincuentes juveniles sean retenidos en instalaciones separadas de la población carcelaria general para facilitar la rehabilitación. Los niños menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal pero pueden estar sujetos a responsabilidad civil. Según informes, los reclusos adultos y la policía abusaron de los prisioneros juveniles. Los programas de rehabilitación para menores u otros prisioneros fueron escasos.

La violencia fue generalizada debido a la seguridad interna inadecuada. Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura y amenazas de muerte. Hubo informes de violación y agresión sexual cometidos por las autoridades y otros reclusos. La corrupción exacerbó estos problemas y obstaculizó su exposición y resolución. La violencia entre prisioneros fue endémica. En marzo de 2018, la policía disparó y mató a ocho reclusos durante una operación para recuperar el control de la prisión de Palmasola en Santa Cruz. En junio, un defensor de los prisioneros declaró que no se había investigado ni castigado a ningún guardia por la muerte de los reclusos.

El presupuesto nacional asignó solo ocho bolivianos (USD 1.17) por día por prisionero para comidas. La capacidad de hacer ejercicio varía mucho según la situación de seguridad en la prisión. Según algunos contactos, los reclusos podían ser reclusos arbitrariamente en sus celdas durante un largo período de tiempo o encerrados en régimen de aislamiento sin explicación. Los reclusos con medios independientes pudieron comprar transferencias al centro de rehabilitación, un centro de detención de nueva construcción con mejores condiciones de vida. Un médico atendió a los reclusos en cada prisión dos veces al mes. Aunque los servicios médicos fueron gratuitos, las prisiones

rara vez tuvieron medicamentos a mano. Las enfermedades de la piel y la tuberculosis estuvieron generalizadas debido a los espacios reducidos para dormir y la falta de medicamentos para controlar el contagio. Las mujeres encarceladas carecieron de acceso a servicios obstétricos.

La corrupción fue persistente. La riqueza de un prisionero a menudo determinó su seguridad física, el tamaño de su celda, privilegios de visita, su capacidad de asistir a audiencias judiciales, su elegibilidad para salir por el día y el lugar y duración de su confinamiento. Los reclusos y las ONG alegaron que hubo un número insuficiente de policías para acompañar a los reclusos a sus audiencias, y los directores de las prisiones a menudo se negaron a intervenir, lo que empeoró los retrasos.

La policía a veces exigió sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho de asistir a sus propias audiencias. Medios informativos independientes reportaron que las denuncias de corrupción contra la policía por cobros internos fueron comunes. Los reclusos declararon que los guardias los extorsionaron pidiendo dinero para permitir la entrada de artículos.

Administración: Las autoridades generalmente no realizaron investigaciones de acusaciones creíbles de maltrato. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los presos pudieron presentar quejas ante una comisión de jueces de distrito para su investigación, pero debido al temor a represalias por parte de las autoridades penitenciarias, los reclusos con frecuencia no lo hicieron.

Monitoreo independiente: El gobierno generalmente permitió visitas a las prisiones por parte de observadores independientes no gubernamentales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG locales, jueces, autoridades religiosas, legisladores y medios de comunicación.

d. Arresto o detención arbitraria

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley. La ley también establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención en la corte. El gobierno generalmente observó esta disposición.

Procedimientos de arresto y tratamiento de detenidos

La ley requiere que la policía obtenga una orden de arresto de un fiscal y que un juez corrobore la orden dentro de las ocho horas luego de un arresto. La policía no cumplió estrictamente estas restricciones de tiempo, excepto en los casos en que el gobierno ordenó específicamente ese cumplimiento. La ley también ordena que un detenido comparezca ante un juez dentro de las 24 horas (excepto bajo estado de sitio declarado, durante el cual un detenido puede permanecer recluido durante 48 horas), momento en el cual el juez debe determinar la conveniencia de continuar la detención preventiva u otorgar libertad bajo fianza. El juez debe ordenar la liberación del detenido si el fiscal no demuestra suficientes motivos para el arresto. El gobierno permite a los sospechosos seleccionar sus propios abogados y proporciona un abogado de la Oficina de Defensa Pública si el sospechoso lo solicita. Los defensores públicos generalmente estuvieron sobrecargados y limitados en su capacidad de proporcionar asistencia legal adecuada y oportuna. Si bien se permite la fianza, la mayoría de los detenidos fueron puestos en prisión preventiva o no pudieron pagar la fianza. Varios expertos legales señalaron que la detención preventiva fue la regla más que la excepción.

Arresto arbitrario: La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley.

Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, su administración a veces usó el sistema judicial con fines políticos, emprendiendo acciones legales contra varios miembros de la oposición y críticos del gobierno. Procesos penales seguían pendientes contra varios ex funcionarios del gobierno. Los medios informaron sobre 40 casos abiertos contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien estuvo bajo arresto domiciliario durante aproximadamente 30 días y fue objeto de una investigación continua, y 30 casos contra Ernesto Suárez, el ex prefecto de Beni. Múltiples casos continuaron contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el gobernador de La Paz, Félix Patzi; la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón; los ex presidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa; el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz; y el líder del partido de oposición Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. Además, en enero de 2018, el gobierno abrió una investigación contra Soledad Chapetón por mal manejo de tierras municipales que el entonces alcalde de El Alto transfirió al sector privado en 1990 (en ese momento Chapetón tenía 10 años). Hasta noviembre no se habían registrado cargos formales contra Chapetón.

Detención preventiva: La ley otorga a los jueces la autoridad para ordenar la detención preventiva si existe una alta probabilidad de que un sospechoso haya cometido un delito, si existe evidencia de que el acusado intenta obstruir el proceso de investigación, o si un sospechoso se considera un riesgo de fuga. Si un sospechoso no es detenido, un juez puede ordenar restricciones significativas sobre los movimientos del sospechoso.

La ley establece que nadie será detenido por más de 18 meses sin cargos formales. Si después de 18 meses el fiscal no presenta cargos formales y concluye la fase de investigación, el detenido puede solicitar su liberación a un juez. El juez debe ordenar la liberación del detenido, pero no se retiran los cargos contra el detenido. Por ley, la fase de investigación y la fase de juicio de un caso no pueden exceder los 36 meses en total. La ley permite una extensión del juicio si los retrasos en el proceso se deben a la defensa. En estas circunstancias, la detención preventiva puede exceder el límite de 36 meses sin violar la ley.

A pesar de los límites legales a la detención preventiva, la detención preventiva prolongada siguió siendo un problema. Los procedimientos legales complejos, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la interferencia ejecutiva, la corrupción, la escasez de defensores públicos y los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a retrasos en los juicios que alargaron la detención preventiva y mantuvieron a muchos sospechosos detenidos más allá de los límites legales para la finalización de un juicio o la presentación de cargos formales. Muchos abogados defensores no asistieron intencionalmente a las audiencias para retrasar los procedimientos del juicio y finalmente evitar una sentencia definitiva. Según el Informe sobre el Estado de Justicia de 2018, el 68 por ciento de los presos varones y el 74 por ciento de las presas acusadas de un delito se encontraban bajo detención preventiva. Algunas ONG estimaron que el 85 por ciento de los reclusos estaban en detención preventiva.

e. Denegación de un juicio público justo

La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial siguió sobrecargado, vulnerable a la influencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo, y plagado de acusaciones de corrupción. Las autoridades de la administración de Morales generalmente respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los

veredictos. Los jueces y fiscales a veces practicaron la autocensura al emitir fallos para evitar convertirse en blanco del acoso verbal y legal por parte del gobierno.

A principios de diciembre, la jueza Patricia Pacajes, involucrada en el caso del médico Jhiery Fernández, fue declarada culpable de incumplimiento de deberes. Fernández fue detenido en diciembre de 2014 por la presunta violación y muerte del "bebé Alexander", quien murió en noviembre de 2014 mientras estaba en el hospital donde Fernández estaba de servicio. En marzo de 2018, después de casi cuatro años de detención preventiva, durante los cuales Fernández fue torturado por los guardias de la prisión, un tribunal lo declaró culpable de violación, homicidio y por no cumplir con sus deberes médicos y lo condenó a 20 años de prisión. Sin embargo, la presidenta del juzgado, Patricia Pacajes, admitió en un audio grabado en secreto que ella sabía que Fernández era inocente, pero que lo había condenado para encubrir un error cometido por la doctora forense, Angela Mora. En septiembre de 2018, Pacajes fue destituida de sus deberes como jueza, y en octubre de 2018, el Juzgado Anticorrupción y Violencia ordenó que Pacajes permaneciera en detención preventiva por incumplimiento de deberes. En octubre de 2018, Fernández fue liberado de la prisión y fue puesto bajo arresto domiciliario. En noviembre de 2018, un tribunal declaró que Fernández ya no estaba bajo arresto y que su movimiento no estaba restringido. El tribunal declaró simultáneamente que los fiscales y jueces involucrados en el caso, incluida la presidenta del juzgado Pacajes, eran corruptos; a principios de diciembre, un tribunal anticorrupción la condenó por incumplimiento de deberes y la condenó a tres años y cinco meses de cárcel. Fernández debía someterse a un proceso para anular su sentencia inicial, pero según los expertos legales, este proceso podría llevar varios años.

El poder judicial enfrentó numerosos problemas administrativos y presupuestarios. Las ONG afirmaron que los fondos presupuestados para la judicatura eran insuficientes para garantizar una justicia igualitaria y eficiente y que depender de fiscales públicos con insuficientes fondos y sobrecargados de trabajo había dado lugar a graves retrasos judiciales. Como resultado, los funcionarios de la justicia fueron vulnerables al soborno y a la corrupción, según observadores creíbles, incluidos expertos legales.

Procedimientos de juicio

La ley establece el derecho a un juicio justo y público sin demoras indebidas, pero el gobierno no siempre respetó la ley. Los acusados tienen derecho a ser informados de los cargos de manera inmediata y detallada y a la presunción de inocencia y juicio por un panel de jueces. Tienen el derecho de evitar la autoinculpación y a consultar a un abogado de su elección, recibir el tiempo y las instalaciones adecuadas para preparar una defensa y confrontar testigos adversos, presentar testigos y pruebas, y presentar una apelación. Los acusados que no pueden pagar un abogado tienen derecho a un defensor público o a un abogado privado remunerado con fondos públicos. La ley exige servicios de traducción e interpretación gratuitos. Los funcionarios no siempre cumplieron la ley.

La corrupción, la influencia de otras ramas del gobierno y la cobertura judicial insuficiente debilitaron estos derechos constitucionales.

Presos y detenidos políticos

El 14 de noviembre, luego de la renuncia del presidente Morales, Franklin Gutiérrez, líder de una asociación de coccaleros opuestos al gobierno de Morales, fue liberado de prisión, pero el estado legal de su caso no estaba claro. En agosto de 2018, luego de la muerte a tiros del teniente de policía Daynor Sandoval durante una escaramuza con los coccaleros, la policía arrestó a Gutiérrez y lo detuvo preventivamente. La Fiscalía acusó a Gutiérrez de cinco delitos: asesinato, intento de asesinato, ataques contra servicios públicos, ataques contra los servicios de transporte y posesión ilegal de armas, aunque numerosos observadores argumentaron que había poca evidencia para respaldar los cargos y, según los informes, los fiscales nunca presentaron tales evidencias. Activistas de derechos humanos y líderes de la sociedad civil alegaron que Gutiérrez era un preso político y había sido detenido sin el debido proceso o causa.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

La ley permite a las personas y organizaciones buscar recursos penales por violaciones de derechos humanos a través de los tribunales nacionales. Al concluir un juicio penal, el demandante puede iniciar un juicio civil para buscar compensación por daños. El Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones administrativas sobre casos específicos de derechos humanos. Las resoluciones

del Defensor del Pueblo no son vinculantes, y el gobierno no está obligado a aceptar sus recomendaciones.

f. Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe dichas acciones, y no hubo informes de que el gobierno no hubiera respetado estas prohibiciones.

Sección 2. Respeto a las libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión, incluyendo para la prensa

Si bien la constitución establece la libertad de expresión, incluyendo para la prensa, el gobierno de Morales y sus aliados llevaron a cabo represalias contra los medios de comunicación que expresaron opiniones disidentes. Las acciones del gobierno de Morales para frenar las críticas crearon un clima de hostilidad hacia los periodistas y medios independientes y dieron como resultado la autocensura de muchas fuentes de noticias. Algunos medios informaron que el gobierno los presionó e intimidó para que informaran favorablemente sobre sus políticas, particularmente por medio de retener la publicidad del gobierno e imponer impuestos elevados.

Libertad de expresión: Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, el gobierno de Morales continuó denunciando a los críticos en la prensa y a fuentes en medios independientes. En febrero de 2018, Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el país sufría de "censura manipulada por la publicidad estatal, las leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia hacia los puntos de vista críticos". Dijo que estos factores ponían en riesgo "la libertad de prensa y de expresión, y la democracia".

El 11 de septiembre, múltiples fuentes de noticias informaron que, bajo la administración de Morales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) amenazó con sancionar a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y a un grupo de la sociedad civil, la Fundación Jubileo, por publicar lo que consideraba una encuesta de opinión "no válida" que mostraba al presidente Evo Morales mucho más débil de lo que se creía antes de las elecciones generales del 20 de octubre. El TSE realizó observaciones técnicas y legales de la encuesta y

utilizó este argumento para prohibir la difusión de la encuesta de opinión. Sin embargo, grupos de la sociedad civil y la UMSA argumentaron que se siguieron todos los requisitos legales, técnicos y operativos para realizar la encuesta nacional. A pesar de este argumento, el TSE declaró que el estudio no podía ser difundido.

En un informe de mayo, UNITAS, una organización local dedicada a los derechos humanos, identificó 88 violaciones contra la libertad de expresión desde marzo de 2018 hasta febrero. Las violaciones incluyeron autocensura, "estigmatización" de periodistas, falsas acusaciones de conducta criminal contra periodistas, restricciones en el acceso a la información pública, discriminación por parte del gobierno y censura.

El 14 de noviembre, la Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, advirtió públicamente que ella actuaría "de acuerdo con la ley" contra "periodistas o pseudo periodistas que estén cometiendo sedición". Los periodistas nacionales y la CIDH criticaron la declaración de Lizárraga como una amenaza contra la libertad periodística y la libertad de prensa.

El 10 de diciembre, bajo el gobierno de transición, el famoso dibujante Al Azar renunció al periódico local La Razón. Comentaristas describieron la renuncia de Al Azar como "parte de un hostigamiento sistemático a la libertad de prensa" debido al hostigamiento en línea de origen no revelado que condujo a lo que describieron como "autocensura". La Razón anunció que el dibujante había comunicado al liderazgo del periódico que "debido al asedio que había experimentado en las últimas semanas debido a sus caricaturas políticas... no podía continuar su trabajo creativo en nuestras páginas editoriales".

Prensa y medios, incluidos los medios en línea: Según la Asociación Interamericana de Prensa, antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, la administración de Morales intentó regularmente descalificar a la prensa independiente alegando que actuaba en nombre de la oposición política y que propagaba "noticias falsas" para generar tensión social. Según el Decreto Supremo 181, el gobierno debería proporcionar bienes y servicios a todos los medios de comunicación de manera no discriminatoria, pero no adquirió espacios para anuncios en medios de comunicación considerados adversarios.

Los periodistas enfrentaron amenazas a su trabajo. En noviembre de 2018, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su preocupación

por informes sobre vigilancia policial de la actividad en línea de los periodistas, señalando que dicha vigilancia ponía en riesgo a los periodistas y limitaba severamente su capacidad de investigar e informar las noticias de manera libre y precisa.

Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, los medios de comunicación alegaron que su gobierno presionaba a las organizaciones de noticias para que informaran favorablemente sobre las políticas gubernamentales y tomaban represalias contra las organizaciones de noticias que no cumplían. La ANP y varios periodistas alegaron que las tácticas de represalia del gobierno incluyeron retirar anuncios y realizar auditorías fiscales desproporcionadas, lo que obligó a las empresas a gastar mucho tiempo y recursos para defenderse. Entidades gubernamentales como el Servicio Nacional de Impuestos, Dirección General de Estrategias, la Autoridad de Fiscalización de Empresas, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, las Direcciones Departamentales de Trabajo y el Viceministerio de Políticas de Comunicación, que es responsable del monitoreo de la publicidad gratuita, llevaron a cabo inspecciones y aplicaron multas que muchos observadores calificaron de injustificadas. La ANP expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno atacó a los medios de noticias independientes e intentó “sofocar económicamente” a las entidades de medios que no servían al gobierno. La asignación de publicidad estatal a menudo excluyó a los medios que cuestionaron las acciones del gobierno, al grado que algunos medios despidieron a varios periodistas de investigación por temor a perder la publicidad oficial.

Violencia y acoso: A partir de septiembre, la ANP identificó 92 casos de restricciones a la libertad de prensa, 61 de los cuales fueron perpetrados por la administración de Morales o contra medios de comunicación críticos al gobierno de Morales. El 31 de octubre, la ANP informó sobre 15 ataques directos contra periodistas inmediatamente después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

Hubo ataques e intimidación por parte de la población local contra reporteros y medios de comunicación que se percibían como críticos hacia la administración de Morales. El 19 de agosto, periodistas fueron atacados por un grupo de personas en Cochabamba, enojadas por la cobertura "poco halagadora" que los periodistas dieron a la administración de Morales. En respuesta a los informes de que grupos leales al gobierno de Morales fuera de

los centros de las ciudades estaban atacando y hostigando a los periodistas, la ANP pidió a las poblaciones rurales que "respeten el trabajo de los periodistas".

Durante la administración de Morales, los sitios web de los periódicos Sol de Pando, Agencia de Noticias Fides, La Razón y Página Siete, que a veces publicaban artículos críticos respecto a la administración de Morales, fueron dejados inutilizables a causa de ataques cibernéticos ejecutados por actores desconocidos.

Censura o restricciones de contenido: Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, su gobierno censuró a los periodistas, y los periodistas practicaron la autocensura por temor a perder sus trabajos o perder acceso a las fuentes gubernamentales, además del temor a ser procesados y hostigados. Las organizaciones de derechos humanos informaron que muchos periodistas fueron despedidos por informar sobre temas controvertidos que estaban en conflicto con la administración de Morales.

Libertad de internet

No hubo evidencia de que el gobierno restringiera o interrumpiera el acceso a Internet o censurara el contenido en línea. Sin embargo, antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, los empleados del gobierno enfrentaron represalias por expresar su apoyo a iniciativas, ideas y eventos críticos de la administración del MAS en línea y en las redes sociales. Las represalias incluyeron el despido del empleo.

La cantidad de cuentas falsas en las redes sociales como Facebook y Twitter continuó aumentando durante todo el año, tanto a favor como en contra del gobierno de Morales. Muchas de las cuentas criticaron las publicaciones en redes sociales hechas por líderes de la oposición al tiempo que expresaron su apoyo al contenido producido por la administración de Morales. Los funcionarios de Morales admitieron abiertamente que financiaron a "guerreros digitales" que atacaron a los líderes de la oposición en las redes sociales a través de cuentas falsas.

Las ONG expresaron preocupación con respecto a la Ley de Ciudadanía Digital de julio de 2018. La ley permite la recopilación masiva de datos personales y permite que las instituciones públicas, y las entidades privadas que brindan servicios públicos, compartan datos e información sobre los

individuos. La ley ofrece pocas garantías contra el uso indebido de datos por parte de funcionarios públicos y poca claridad con respecto a los mecanismos de denuncia por parte de las personas afectadas.

Libertad académica y de eventos culturales

No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica o eventos culturales, aunque consideraciones políticas presuntamente influyeron en los nombramientos académicos.

b. Libertades de reunión y asociación pacíficas

La constitución establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, pero antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, grupos de la sociedad civil, en particular pero no exclusivamente aquellos críticos con el gobierno, enfrentaron acoso por parte de los funcionarios del gobierno de Morales.

Libertad de reunión pacífica

Si bien la ley requiere un permiso para la mayoría de las manifestaciones, el gobierno rara vez hizo cumplir las disposiciones, y la mayoría de los manifestantes se manifestaron sin obtener permisos. La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero ocasionalmente los manifestantes portaron armas, incluyendo palos, machetes, armas de fuego, petardos y dinamita. Las fuerzas de seguridad a veces dispersaron a grupos de protesta que portaban armas o amenazaban instalaciones gubernamentales y privadas. El número de protestas aumentó considerablemente después de las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de octubre, que se vieron estropeadas por el fraude y la manipulación.

El 31 de octubre, la organización de apoyo al MAS Ponchos Rojos atacó a un grupo de médicos que protestaban frente al Hospital Obrero en La Paz con piedras y palos. Según un informe de la Caja Nacional de Seguridad, 15 personas resultaron heridas en la escaramuza. Esa noche, después de la manifestación anti-Morales en La Paz, manifestantes, en su mayoría jóvenes, intentaron ingresar a la Plaza Murillo, la plaza principal del gobierno en La Paz, sede de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el antiguo palacio presidencial, donde se enfrentaron a miles de mineros que

apoyaban al MAS. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud.

Tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre, los opositores a Morales llenaron las calles de La Paz con expresiones de júbilo, con algunos grupos saqueando y destrozando casas de personas afiliadas al MAS. Sin embargo, a medida que avanzó la noche, los partidarios del MAS salieron a las calles de La Paz y respondieron con sus propios actos de vandalismo y saqueo. Según activistas de derechos humanos e informes de los medios de comunicación, las casas de seis personas a quienes los partidarios del MAS identificaron como prominentemente alineadas con la oposición fueron quemadas.

Libertad de asociación

La constitución establece la libertad de asociación, pero el gobierno no respetó este derecho de forma consistente. Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, las ONG seguían siendo blanco de los funcionarios del gobierno, incluido el presidente Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ministros del gobierno de Morales, si operaban de una manera percibida como adversaria al gobierno. Algunas ONG alegaron que los mecanismos de inscripción del gobierno eran deliberadamente estrictos para disuadir la acción de la sociedad civil.

Luego de las primeras elecciones primarias presidenciales realizadas en el país el 27 de enero y las elecciones presidenciales del 20 de octubre, algunos funcionarios del gobierno informaron que al día siguiente de las elecciones sus superiores les exigieron que presentaran pruebas para demostrar que habían votado por la fórmula Evo-Álvaro. Las pruebas que se les exigió que presentaran incluyeron fotografías de su papeleta mostrando que habían votado por Evo Morales, la dirección del lugar de votación donde presuntamente habían votado, y un certificado del TSE que demostraba que habían votado.

El 16 de abril, los medios de comunicación informaron que el coronel David Flores fue dado de baja de la fuerza policial por aparecer vistiendo su uniforme en un breve video publicado en 2018 en el que defendía el movimiento 21F, que se opuso a la candidatura de Morales para presidente y rechazó el fallo del Tribunal Constitucional de 2017 que efectivamente anuló los límites al período del mandato presidencial establecido en la constitución.

c. Libertad de religión

Vea el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado en <https://www.state.gov/religiousfreedomreport/>.

d. Libertad de movimiento

La ley establece la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos.

Movimiento dentro del país: La ley prohíbe los viajes en los días de elecciones y en los días del censo y restringe los viajes nacionales y extranjeros por hasta tres meses como penalización a las personas que no votan. A varios políticos opositores a la administración de Morales con procesos legales en su contra se les prohibió abandonar el país y se les exigió que entregaran sus pasaportes.

e. Personas desplazadas internamente

No aplicable.

f. Protección de refugiados

Abuso de migrantes, refugiados y apátridas: El 17 de marzo, la policía y funcionarios de inmigración detuvieron a 14 migrantes venezolanos (tres mujeres y 11 hombres) de un refugio para migrantes en La Paz por haber participado en una manifestación pacífica contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela el 15 de marzo. Según los defensores de los migrantes y los informes de los medios, los oficiales llevaron a los inmigrantes a la oficina de inmigración y los acusaron de "conspiración" y "actividades políticas a cambio de dinero". Ese mismo día, cinco de los migrantes fueron deportados; los nueve restantes, que habían solicitado asilo, fueron liberados. Cinco de los migrantes restantes posteriormente huyeron a Perú por temor a nuevos abusos. Según Amnistía Internacional, los liberados temían más represión y deportación arbitraria.

Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, la administración de Morales no cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los desplazados internos,

refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas u otras personas de interés. El 13 de diciembre, bajo el gobierno de transición, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, anunció que el país otorgaría el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos. Explicó que la mayoría de los venezolanos estaban en Bolivia bajo un estado irregular o con permisos temporales debido a las regulaciones de la administración de Morales. Con el respaldo financiero del ACNUR, anunció que el estatus de los venezolanos en el país se cambiaría a un estado de refugiado y que los futuros inmigrantes venezolanos serían admitidos como refugiados.

Acceso al asilo: La ley prevé la concesión del asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados a través de la Comisión Nacional de Refugiados. El país tiene una estructura y marco legal para acomodar a quienes buscan refugio y tiene un registro de refugiados y apátridas. A pesar de estas disposiciones, hasta octubre, la administración de Morales no había otorgado asilo ni estatus de refugiado a los migrantes venezolanos. Según los defensores de los derechos humanos y los migrantes, no se otorgaron visas humanitarias a los migrantes venezolanos de enero a noviembre. El 13 de diciembre, el gobierno de transición anunció que comenzaría a otorgar el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos.

Empleo: Los refugiados tienen derecho a trabajar una vez que las autoridades les otorguen residencia pero no mientras esperan solicitudes pendientes.

Soluciones duraderas: Por ley, los refugiados tienen un camino hacia la naturalización, y el gobierno asume el 90 por ciento de los costos asociados con este proceso. El gobierno de Morales no reconoció a los venezolanos como refugiados ni la crisis de refugiados. Como resultado, hasta noviembre no se había otorgado a los venezolanos acceso a los beneficios de este proceso.

g. Apátridas

No aplicable.

Sección 3. Libertad para participar en el proceso político

La ley brinda a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas libres y justas celebradas por votación secreta y basadas en sufragio universal e igualitario.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: El 27 de enero, el país celebró sus primeras elecciones presidenciales primarias. En septiembre de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Organizaciones Políticas con disposiciones que incluían la implementación de las primarias para el ciclo electoral de 2019, a pesar del tiempo muy limitado para prepararse para el nuevo proceso electoral. Las primarias fueron, por lo tanto, ampliamente vistas por los medios de comunicación y la sociedad civil como una táctica política del MAS para legitimar la apuesta inconstitucional de Morales por otro mandato presidencial. Participaron el MAS y ocho partidos de oposición, y cada uno presentó una sola fórmula de candidato presidencial y vicepresidencial. Cada fórmula necesitaba recibir solo un voto válido para estar calificada para participar en las elecciones presidenciales de octubre, lo que hizo que las elecciones primarias fueran más simbólicas que políticamente competitivas. La votación no fue obligatoria (a diferencia de las elecciones generales), y solo pudieron participar los miembros registrados del partido. Los resultados reportados del TSE revelaron que aproximadamente el 36 por ciento de los votantes registrados del MAS participaron, con aproximadamente una décima parte de ellos emitiendo una papeleta en blanco o nula, las cuales son formas tradicionales para demostrar un voto de protesta.

El 20 de octubre, el país celebró elecciones presidenciales. Las protestas comenzaron inmediatamente después de la supuesta victoria en primera ronda del presidente Evo Morales. En la noche de las elecciones, el TSE detuvo el recuento preliminar de votos sin una explicación oficial, lo que generó una sospecha generalizada de su manipulación. Cuando el conteo se reinició un día después, mostró una brecha mayor entre Morales y el ex presidente Carlos Mesa, el segundo más cercano, que la misión de observación de la OEA calificó de "inexplicable". El TSE declaró formalmente a Morales vencedor el 25 de octubre, anunciando que apenas había superado el margen de 10 puntos sobre Mesa, necesario para evitar una segunda vuelta.

Las protestas continuaron después del anuncio de la victoria del 25 de octubre en medio de denuncias de fraude y se volvieron más disruptivas con el cierre de carreteras en todo el país, una cantidad estimada de 36 personas muertas y más de 800 que resultaron heridas como resultado de los disturbios civiles. Las protestas fueron predominantes en la ciudad de Santa Cruz, el centro

tradicional de oposición a Morales, pero también en otras áreas como Sucre, Potosí, Tarija y La Paz.

El 29 de octubre, el gobierno de Morales anunció un acuerdo con la OEA sobre una auditoría oficial vinculante del proceso electoral. Aunque el principal candidato de la oposición, Carlos Mesa, había respaldado originalmente la idea, posteriormente se unió a las filas del Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos de la sociedad civil que pedían una anulación total de las elecciones.

El 8 de noviembre, el comando central de la policía en Cochabamba anunció que ya no aceptaría órdenes para reprimir a los manifestantes. Las unidades policiales de todo el país hicieron lo mismo en las siguientes 36 horas.

Temprano en la mañana del 10 de noviembre, el equipo de auditoría de la OEA emitió su informe inicial, en el que el equipo de la OEA recomendó que "la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente" y que debía establecerse "una nueva composición del órgano electoral". El informe destacó muchas irregularidades en el día de las elecciones y en el período posterior a la elección, como ser "una manipulación clara" del conteo preliminar de votos, las actas de conteo físicamente alteradas por funcionarios del MAS y la manipulación de los sistemas electorales. También concluyó que era "estadísticamente improbable" que Morales hubiera obtenido la diferencia del 10 por ciento necesaria para impedir una segunda vuelta electoral. Tras la publicación del informe preliminar de la OEA, numerosos funcionarios del gobierno del MAS renunciaron, incluidos seis ministros, varios gobernadores del MAS, varios senadores y alcaldes del MAS y el viceministro de Relaciones Exteriores. A mediodía, la Central Obrera Boliviana, la federación sindical más grande del país y aliada incondicional del entonces presidente Morales, lo animó públicamente a renunciar "para pacificar el país". Posteriormente, el entonces jefe de las fuerzas armadas, general Williams Kaliman, y el entonces jefe de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, emitieron declaraciones separadas declarando que las fuerzas de seguridad "apoyarían al pueblo" y recomendaron que Morales renunciara. El presidente Morales anunció su renuncia a última hora de la tarde del 10 de noviembre en una conferencia de prensa desde Chimoré, Cochabamba. Un día después, en la tarde del 11 de noviembre, Morales tuiteó que se dirigía a México, agradeció a ese país por concederle asilo y prometió regresar a Bolivia.

En vista de las renuncias de Morales, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra, el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinacelli, y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, el Senado declaró a la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, como presidenta de transición el 12 de noviembre. El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la sucesión presidencial a través de una declaración pública el mismo día.

Previamente, en 2016, el gobierno había celebrado un referéndum para permitir que el entonces presidente Morales buscara un cuarto mandato. Los ciudadanos rechazaron la medida en un proceso que los observadores internacionales consideraron mayormente imparcial y libre. En 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la prohibición de la constitución sobre los límites del período de mandato, en un controvertido fallo que declaró que los límites de plazo violaban un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho a la participación política. En diciembre de 2018, el TSE aprobó la petición de Morales de postularse por cuarto mandato consecutivo en 2019.

Partidos políticos y participación política: Hubo informes creíbles de que el partido MAS requería que los funcionarios del gobierno profesaran lealtad al partido al gobierno o se inscribieran formalmente como miembros del partido para obtener/mantener sus empleos o acceder a otros servicios gubernamentales. El 25 de febrero, los medios informaron que el MAS requería que los funcionarios del gobierno afiliados al partido donaran el 10 por ciento de su salario a la campaña presidencial. La ley prohíbe y sanciona el requerir contribuciones a una campaña política y establece que las organizaciones políticas no pueden "gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas". Los medios también informaron que funcionarios públicos dijeron anónimamente que sus supervisores relacionados con el MAS los obligaron a asistir a las manifestaciones del MAS en apoyo del entonces presidente Morales.

Participación de mujeres y minorías: Ninguna ley limita la participación de mujeres o miembros de minorías en el proceso político y estas personas sí participaron. La ley exige la paridad de género en el proceso de selección de candidatos a nivel legislativo nacional, regional y municipal. Si bien las

mujeres tuvieron una cantidad considerable de representación en el nivel legislativo, con 85 de 175 escaños legislativos, continuaron estando subrepresentadas en los puestos ejecutivos. Los candidatos a alcalde, gobernador, vicepresidente y presidente no fueron elegidos de las listas de partidos, y la mayoría de los cargos políticos ejecutivos permanecieron dominados por hombres.

Las mujeres que participan en política enfrentaron violencia y acoso. Según una encuesta realizada por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, el 59 por ciento de las concejalas encuestadas había sufrido algún tipo de violencia o acoso político en su municipio y el 39 por ciento no completó su mandato debido a la gravedad de las amenazas y hostilidad que enfrentaron. La investigación realizada por la Universidad Mayor de San Andrés y publicada el 17 de abril indicó que el 75 por ciento de las legisladoras habían sido víctimas de acoso y violencia política. Según la Asociación de Alcaldesas y Concejalas, de enero a junio de 2018, hubo 70 casos denunciados de acoso político contra mujeres políticas.

El 6 de noviembre, Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, una pequeña ciudad en la parte central del país, que estaba afiliada al MAS, fue agredida por una multitud de hombres. Los hombres atacaron específicamente a Arce debido a su posición política y su afiliación previa con el entonces presidente Morales. Los hombres golpearon a Arce hasta que ella quedó inconsciente. Una vez que recuperó la conciencia, los hombres le quitaron los zapatos y la obligaron a caminar descalza sobre cristales y piedras durante varios kilómetros a través de la ciudad como un "paseo de la vergüenza". Durante la caminata, las personas le rasgaron la ropa, le tocaron el cuerpo y los senos, le cortaron el cabello por la fuerza, cortándole en cierto momento partes del cuero cabelludo, y la rociaron con pintura roja, gasolina y orina. La multitud grabó el incidente para las redes sociales y le ordenó renunciar y hablar críticamente contra el entonces presidente Morales. Varias horas después de que comenzara el ataque, hombres no identificados recuperaron a Arce de la multitud y la llevaron a la policía, que la ayudó a encontrar atención médica. Se vio obligada a esconderse por su seguridad durante varias semanas después del ataque.

La Ley de Organizaciones Políticas de 2018 otorga a las organizaciones políticas la autoridad de castigar el acoso político. Por ley, cada partido político debe tener un miembro cuyo deber es promover la paridad y dar seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política aplicando las sanciones apropiadas.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales por corrupción cometida por los funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios a menudo participaron en prácticas corruptas con impunidad.

Corrupción: El 8 de enero, la jueza Claudia Castro Dorado pidió que el alcalde de Alto Beni, Abraham Balboa Ticona, miembro del MAS, permaneciera en detención preventiva mientras la Fiscalía investigaba una denuncia presentada por un concejal del municipio de Alto Beni. La denuncia acusaba al alcalde de incumplimiento de deberes y daños económicos al municipio por la instalación de dos sistemas de alcantarillado que no funcionaban. Los medios de comunicación caracterizaron estas presuntas acciones como corrupción. Ticona fue posteriormente liberado de la prisión y reanudó sus funciones como alcalde; la investigación continuaba, según los medios.

Durante el gobierno de transición, el 18 de noviembre, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue liberado de detención preventiva en espera de su juicio, que había sido suspendido en múltiples ocasiones. En abril de 2018, Leyes fue puesto bajo arresto domiciliario y suspendido de sus funciones oficiales después de ser acusado por las autoridades por incumplimiento de deberes como representante público, abuso de influencias, participación en contratos lesivos para el estado, participación en negociaciones incompatibles con el cargo público y conducta económica poco ética para la compra de mochilas con un aumento significativo de precios.

Representantes de los medios y líderes de la sociedad civil identificaron estas acusaciones como cargos de corrupción y coloquialmente llamaron a este caso "Mochilas I". La Oficina de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó una segunda denuncia penal, conocida como "Mochilas II", en abril de 2018 alegando que Leyes utilizó el mismo modus operandi y la práctica de licitación irregular para adquirir mochilas en 2017. Después de una audiencia supervisada por el Juzgado Anticorrupción para los casos Mochilas I y II en noviembre de 2018, el juez de la audiencia Gonzales determinó que Leyes era un riesgo de fuga y ordenó su detención preventiva. Posteriormente, en diciembre de 2018, el Contralor General abrió un tercer caso, conocido como "Mochilas III", con cargos casi idénticos por la compra de mochilas en 2016. Algunos informes de los medios alegaron que antes de la renuncia del presidente Morales el 10 de noviembre, el sistema judicial estuvo procesando casos de corrupción que involucraban a miembros de la oposición política

como este mucho más rápidamente que los casos que involucraban al liderazgo del MAS. Leyes fue suspendido de su cargo y llevado a los tribunales a las pocas horas de ser acusado de corrupción, mientras que los casos que involucraban a las autoridades del MAS a menudo tardaban años en proceder.

La corrupción policial continuó siendo un problema importante, en parte debido a los bajos salarios y a la falta de capacitación. El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía son responsables de combatir la corrupción, pero la mayoría de los funcionarios corruptos operaron con impunidad. Según un informe publicado el 10 de junio por el Departamento Nacional de Control y Seguimiento de Casos Disciplinarios de la policía, en los últimos cinco años, 180 agentes de policía citados en procesos penales fueron reincorporados después del cierre de sus casos. De los 180 oficiales, 84 estaban involucrados en casos de tráfico de drogas y corrupción. Desde 2006, al menos 12 ex jefes de policía habían sido procesados por corrupción, tráfico de drogas e incumplimiento de deberes, pero hasta septiembre ninguno había recibido una sentencia.

Los casos que involucran acusaciones de corrupción contra el presidente y el vicepresidente requieren la aprobación del Congreso antes de que los fiscales puedan iniciar procedimientos legales. El gobierno de Morales ignoró las sentencias judiciales que consideraron inconstitucional la concesión de inmunidad por cargos de corrupción.

Divulgación financiera: La ley exige que los funcionarios públicos informen sobre posibles conflictos de intereses personales y financieros y declaren sus ingresos y activos. La ley exige que los funcionarios elegidos y designados revelen su información financiera al auditor general, pero sus declaraciones no están disponibles al público. Por ley, el incumplimiento origina sanciones internas, incluido el despido.

Sección 5. Actitud del gobierno con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos contra los derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos trabajaron en el país, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Las ONG y los grupos de derechos humanos que trabajan en problemas considerados delicados por el gobierno de Morales fueron objeto de

ataques verbales, investigaciones fiscales y críticas por parte del entonces presidente Morales y su administración.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: La constitución establece un Defensor del Pueblo sujeto a confirmación de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa para cumplir un mandato de seis años. El Defensor del Pueblo está encargado de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente defendiendo a los ciudadanos contra los abusos del gobierno. La constitución también otorga al Defensor del Pueblo el derecho de proponer legislación y recomendar modificaciones a las leyes y políticas gubernamentales. El Defensor del Pueblo funcionó con recursos inadecuados. Antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre, grupos de la sociedad civil y varias figuras políticas sostuvieron que el Defensor del Pueblo carecía de independencia del gobierno central, en parte porque la super mayoría del MAS en el congreso permitió la confirmación del titular del cargo sin un debate significativo.

Ambas cámaras del Congreso tienen comisiones de derechos humanos que proponen leyes y políticas para promover y proteger los derechos humanos. Diputados y senadores del Congreso prestan servicios en las comisiones por períodos de un año.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley establece penas de prisión de 15 a 20 años por la violación de un adulto (hombre o mujer). El abuso doméstico que resulta en lesiones se castiga con tres a seis años de prisión, y la pena por daños físicos o psicológicos graves recibe una pena de prisión de cinco a 12 años. A pesar de estas disposiciones legales, la ONG Comunidad de Derechos Humanos informó que dos tercios de los casos de violencia doméstica se cerraron sin acciones, y la tasa de condenas de los casos restantes fue inferior al uno por ciento (1%).

La ley prohíbe la violencia doméstica, pero la falta de capacitación sobre la ley y la lentitud de los procesos judiciales, entre otros factores, continuaron obstaculizando la plena aplicación de la ley, según la Entidad de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y grupos de derechos humanos. La violencia doméstica fue el

crimen más frecuentemente cometido en el país, según el Observatorio Nacional de Seguridad Pública. Según una encuesta realizada por la ONG local Coordinadora de la Mujer, el 50 por ciento de las mujeres fueron víctimas de un crimen violento en algún momento de sus vidas; dos tercios de estas mujeres sufrieron violencia en su propio hogar. Un informe de 2017 de ONU Mujeres afirmó que el 92.7 por ciento de las mujeres sufrieron abuso psicológico en algún momento de sus vidas.

La ley penaliza el feminicidio, el asesinato de una mujer en razón de su identidad como mujer, con 30 años de prisión. Activistas dijeron que la corrupción, la falta de una investigación adecuada de la escena del crimen y un sistema judicial disfuncional obstaculizaron las condenas por feminicidio. Según el Ministerio Público y los informes de los medios de comunicación, se registraron 114 condenas por feminicidio durante el año y se emitieron nueve condenas por feminicidio de enero a mayo.

Según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), el 18 de mayo, Rubén Márquez Bautista y Rubén Aravito Chiri, dos policías de Santa Cruz, secuestraron a Rigoberta Barrios, la mataron por asfixia y escondieron su cuerpo en un barril lleno de cemento. Jhonny Aguilera, director de la FELCC de Santa Cruz, informó que Márquez tenía una hija de 11 meses con la víctima. Dijo que antes de que la mujer fuera asesinada, ella le había pedido a Márquez apoyo financiero para el hijo de ambos.

Las organizaciones de derechos de las mujeres informaron que las unidades de policía asignadas a la fuerza especial no tenían suficientes recursos y que los oficiales de primera línea carecían de la capacitación adecuada sobre sus responsabilidades de investigación. Las organizaciones de mujeres también informaron que las víctimas de violencia doméstica recibieron una representación deficiente por parte de los defensores públicos y que generalmente abandonaron sus casos después de que languidieron en el sistema de justicia durante años. En promedio, se requirieron tres años en concluir un caso de violencia doméstica. Una vez cerrado el caso, la víctima a menudo fue responsable de los honorarios legales. La falta de servicios públicos, el largo proceso judicial y la carga financiera desanimaron a la mayoría de las mujeres a denunciar el abuso doméstico por parte de sus cónyuges.

La ley exige la construcción de albergues para mujeres en cada uno de los nueve departamentos del país. Los municipios de La Paz y Santa Cruz

tuvieron refugios temporales para víctimas de violencia y sus hijos. Especialistas en derechos humanos explicaron que los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica no contaban con personal adecuado, no prometían el anonimato y no podían brindar protección contra los abusadores.

Acoso sexual: La ley considera que el acoso sexual es un delito civil. No hubo informes exhaustivos sobre el alcance del acoso sexual, pero los observadores generalmente reconocieron que estaba generalizado (ver también la sección 3, Participación de mujeres y minorías).

Coerción en el control de la población: No hubo informes de aborto forzado ni esterilización involuntaria.

Discriminación: La ley establece el mismo estatus legal y los mismos derechos para las mujeres que para los hombres, pero las mujeres generalmente no gozaron de un estatus social igual al de los hombres. Mientras que la ley de salario mínimo trata a hombres y mujeres por igual, las mujeres generalmente ganan menos que los hombres por igual trabajo. Además, las leyes antidiscriminación no se implementaron de manera uniforme o efectiva para proteger a las mujeres del acoso y la violencia política (véase también la sección 3, Participación de mujeres y minorías).

Niñez

Registro de nacimiento: La ciudadanía se deriva tanto del nacimiento dentro del territorio del país (a menos que los padres tengan estatus diplomático) como de los padres. El registro civil de 2015, el más reciente disponible, indicó que el 56 por ciento de los ciudadanos fueron registrados dentro del primer año de su nacimiento y el 97 por ciento hasta los 12 años.

Abuso infantil: La violación de un niño o niña menor de 14 años conlleva una pena de prisión de 20 a 25 años. La pena por sexo consentido con un adolescente de 14 a 18 años es de dos a seis años de prisión. La Fiscalía General de la Nación informó sobre 58 casos de infanticidio entre enero y agosto de 2018. El Código Penal define el infanticidio como el asesinato de un niño o niña menor de 13 años.

Matrimonio temprano y forzado: La edad mínima para contraer matrimonio es de 14 años para las niñas y 16 para los niños. Los padres o tutores de menores deben aprobar los matrimonios entre adolescentes menores de 18 años.

Explotación sexual de niños: La explotación sexual comercial de niños es punible con penas de prisión de 15 a 20 años, pero sigue siendo un problema grave. La ley también prohíbe la pornografía infantil, punible con penas de 10 a 15 años.

Niños desplazados: UNICEF informó en 2015 que entre 20.000 y 32.000 menores vivían en albergues después que sus padres los abandonaran.

Niños institucionalizados: Organizaciones de defensa de la niñez informaron sobre abuso y negligencia en algunos albergues administrados por el gobierno. El Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz confirmó que de los 380 albergues del país, incluidos los centros para víctimas de abuso, huérfanos y estudiantes, solo 30 tenían acreditación gubernamental por cumplir con los estándares mínimos.

Sustracción internacional de menores: El país es parte en la Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980. Consulte el Informe Anual del Departamento de Estado sobre Sustracción Parental Internacional en <https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html>.

Antisemitismo

La población judía ascendía a menos de 500. No hubo informes de antisemitismo.

Trata de personas

Consulte el Informe del Departamento de Estado Sobre la Trata de Personas en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. La ley exige accesos para usuarios de sillas de ruedas en todos los edificios públicos y privados, la importación libre de impuestos de dispositivos ortopédicos y una reducción del 50 por ciento en

las tarifas de transporte público para personas con discapacidades. La ley también exige que los medios de comunicación y las agencias gubernamentales ofrezcan servicios y publicaciones en lenguaje de señas y braille. El gobierno no hizo cumplir efectivamente estas disposiciones.

Existe una ley nacional para proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero carece de plena aplicación. Rara vez se tomaron medidas oficiales para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de actos de violencia contra las personas con discapacidad.

Las barreras arquitectónicas y de infraestructura prohibieron la facilidad de movimiento en áreas urbanas para personas con discapacidades físicas. Sin embargo, hubo avances en el sector del transporte público en la ciudad de La Paz. El sistema de autobuses y teleférico de la ciudad creció sustancialmente durante el año y proporcionó facilidades para personas con discapacidades.

La ley estipula que las personas con discapacidades "graves y muy graves" tienen derecho a 250 bolivianos (USD 37) por mes. La ley exige que las instituciones públicas y privadas provean empleo a un cierto porcentaje de trabajadores con discapacidad.

El 19 de febrero, Tatiana Moroco, directora de la oficina del Defensor del Pueblo en Oruro, informó que un niño de tres años con síndrome de Down fue abandonado en la mina de estaño y plata de San José. Moroco declaró que su oficina sospechaba que era un intento de infanticidio y creía que el niño iba a ser sacrificado. El 12 de abril, la policía detuvo al padre del niño y lo mantuvo en prisión preventiva por cargos de infanticidio.

Minorías nacionales/raciales/étnicas

El censo de 2012 estableció la existencia de 23.300 afrobolivianos. Los afrobolivianos en las áreas rurales experimentaron el mismo tipo de problemas y discriminación que las personas indígenas que vivían en esas áreas. Líderes de la comunidad afroboliviana informaron que la discriminación laboral era común y que los funcionarios públicos, particularmente la policía, los discriminaban en la provisión de servicios. Los afrobolivianos también informaron sobre el uso generalizado de lenguaje discriminatorio. El gobierno hizo pocos esfuerzos para enfrentar esa discriminación.

Pueblos indígenas

En el censo de 2012, aproximadamente el 41 por ciento de la población mayor de 15 años se autoidentificó como indígena, principalmente de las comunidades quechua y aymara. El gobierno de Morales facilitó importantes avances en la inclusión de los pueblos indígenas en puestos gubernamentales y en la sociedad en general.

Las comunidades indígenas estaban bien representadas en el gobierno y la política, pero continuaron sufriendo una parte desproporcionada de pobreza y desempleo. Los servicios educativos y de salud del gobierno no estuvieron disponibles para muchos grupos indígenas que viven en áreas remotas.

Las tierras indígenas no estaban completamente demarcadas, y la reforma agraria continuó siendo un problema político central. Históricamente, algunas personas indígenas compartieron tierras colectivamente bajo el sistema del *ayllu* (forma tradicional de comunidad), que no recibió reconocimiento legal durante la transición a las leyes de propiedad privada. A pesar de las leyes que disponen la reasignación y titulación de tierras, el reconocimiento y la demarcación de las tierras indígenas no se completaron.

En julio de 2018, los pueblos indígenas del departamento de Beni declararon que el gobierno estaba explotando ilegalmente tierras que consideran sagradas. Personas de Trinidadcito, una comunidad indígena con 42 familias en las zonas rurales de Beni, dieron testimonio sobre los efectos negativos de la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore. Según su queja, el gobierno de Morales estaba promoviendo políticas que conducirían al despojo de sus tierras ancestrales y a no respetar la constitución.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos basados en la orientación sexual y la identidad de género

La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. La ley permite a las personas transgénero actualizar su nombre, identificador de género y fotografía para reflejar su identidad de género en todas las cédulas de identidad y certificados de nacimiento legales.

El Defensor del Pueblo informó en 2017 que el gobierno registró 64 asesinatos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

en los últimos 10 años. Las autoridades investigaron 14 casos, pero los tribunales no habían sentenciado a nadie por estos crímenes.

Según activistas de la comunidad LGBTI, la violencia contra las personas transgénero disminuyó debido en parte a una mejor conciencia de la comunidad sobre los problemas LGBTI. Por ejemplo, el comandante de la policía de Santa Cruz recibió regularmente actualizaciones de activistas LGBTI sobre actos de violencia y problemas sociales que enfrentaba la comunidad. Además, el comandante permitió que las personas transgénero encarceladas fueran retenidas en áreas de acuerdo con su identidad de género.

Las personas LGBTI enfrentaron discriminación en el lugar de trabajo, en la escuela y cuando intentaron acceder a los servicios gubernamentales, especialmente en el área de la atención médica. Las personas transgénero siguieron siendo particularmente vulnerables al abuso y la violencia. La Coalición Boliviana de Colectivos LGBT informo en 2016 que el 72 por ciento de las personas transgénero abandonaron sus estudios de secundaria debido a la intensa discriminación. Activistas transgénero dijeron que la mayoría de la comunidad transgénero se vio obligada a recurrir al trabajo sexual debido a la discriminación en el mercado laboral y la falta de voluntad por parte de los empleadores para aceptar sus documentos de identidad y licencias profesionales. Los activistas informaron que la policía atacó a personas transgénero que eran trabajadoras sexuales.

Las personas LGBTI de edad avanzada enfrentaron altas tasas de discriminación al intentar acceder a los servicios de atención médica. No existieron mecanismos legales para transferir poder legal a una pareja del mismo sexo.

Según activistas de derechos humanos en Cochabamba, en marzo, cuando una mujer que había sido violada en un taxi denunció el crimen, la policía no registró su caso y se centró en el hecho de que se identificó como lesbiana. Según la víctima, le preguntaron repetidamente sobre su sexualidad y la obligaron a volver a contar su asalto traumático a varios agentes. La víctima y la organización de derechos humanos creyeron que su caso no fue tomado en serio porque se autoidentificó como lesbiana.

Estigma social por VIH y SIDA

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra las personas con VIH/SIDA, la discriminación generalizada persistió. Las autoridades del Ministerio de Salud

informaron que la discriminación contra las personas con VIH/SIDA fue más grave en las comunidades indígenas, donde el gobierno también tuvo menos éxito en el diagnóstico de casos. Activistas informaron que la discriminación obligó a las personas VIH-positivas a buscar atención médica fuera del país.

Otra violencia o discriminación social

La violencia infligida por las turbas en reemplazo de la justicia fue consecuencia de un sistema judicial ineficiente, entre otros factores. Los partidarios de la violencia de las turbas alegaron que una actuación policial limitada y una falta de fe en el sistema de justicia para castigar a los delincuentes justificaban adecuadamente sus acciones. Aunque no existieron estadísticas oficiales, informes de los medios sugirieron que la violencia de las turbas en lugar de la justicia conducía a 30-40 muertes cada año. El gobierno no tomó ninguna acción formal para combatir los actos de violencia de la mafia expresados como "justicia por mano propia".

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva

La ley, incluidos los reglamentos y los instrumentos legales relacionados, establece la libertad de asociación, el derecho a organizarse y negociar colectivamente, y el derecho de huelga. La ley prohíbe la discriminación antisindical y exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por realizar actividades sindicales. La constitución establece la protección de las huelgas generales y solidarias y el derecho de cualquier individuo trabajador a unirse a un sindicato. El 29 de mayo, el Tribunal Supremo resolvió proteger el derecho de huelga, pero advirtió que una huelga no podía ser indefinida. Según expertos legales, esta fue en reacción a los trabajadores de la salud que amenazaron con una huelga por tiempo indefinido. Como resultado de esta decisión, los trabajadores de la salud pueden ir a la huelga, pero deben organizarse por turnos para evitar poner en riesgo a la población en general.

Los trabajadores pueden formar un sindicato en cualquier empresa privada de 20 o más empleados, pero la ley exige que al menos el 50 por ciento de la fuerza laboral esté a favor. La ley exige que los sindicatos se registren como entidades legales y obtengan autorización previa del gobierno para establecer un sindicato y confirmar a sus líderes elegidos, permite solo un sindicato por empresa y permite que el gobierno disuelva los sindicatos por mandato

administrativo. La ley también exige que los miembros de las juntas ejecutivas sindicales sean bolivianos por nacimiento. Las leyes laborales prohíben que la mayoría de los empleados públicos formen sindicatos, incluidos los militares, la policía y otras fuerzas de seguridad pública. Algunos trabajadores del sector público (incluidos docentes, trabajadores del transporte y trabajadores de la salud) estaban legalmente sindicalizados y participaban activamente sin penalización como miembros de la Central Obrera Boliviana, la principal federación sindical del país. El gobierno hizo cumplir las leyes aplicables, pero el proceso de ejecución a menudo fue lento debido a la ineficiencia burocrática.

El Juzgado Laboral maneja las denuncias de discriminación antisindical, pero las sentencias tardaron un año o más en emitirse. El juzgado falló a favor de los trabajadores despedidos en algunos casos y exigió su reincorporación. Los líderes sindicales declararon que los problemas a menudo se habían resuelto o ya no eran relevantes para cuando el juzgado emitió el dictamen. Los recursos y sanciones gubernamentales, incluidas las multas y las amenazas de acciones judiciales contra las empresas que violan las leyes laborales, a menudo fueron ineficaces e insuficientes para disuadir las violaciones por este motivo.

La ineficacia de los juzgados laborales y el tiempo prolongado requerido para resolver casos y denuncias limitaron la libertad de asociación. Además, el umbral de 20 trabajadores para formar un sindicato resultó ser una restricción onerosa, ya que se estima que el 72 por ciento de las empresas tenían menos de 20 empleados.

Los inspectores de trabajo pueden asistir a reuniones sindicales y supervisar las actividades sindicales. La negociación colectiva y las negociaciones voluntarias directas entre empleadores y trabajadores sin participación del gobierno fueron comunes. La mayoría de los acuerdos de negociación colectiva se limitaron a abordar los salarios.

b. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero continuaron siendo problemas serios. La explotación laboral, el trabajo forzado y otras formas de servidumbre son punibles con penas suficientes como para disuadir violaciones.

El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley en todos los sectores. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo no fueron efectivos en los esfuerzos de aplicación de la ley o prestación de servicios a las víctimas del trabajo forzoso. El ministerio llevó a cabo varios talleres para educar a los trabajadores vulnerables sobre sus derechos, impuso sanciones contra los empleadores infractores y remitió los casos de presuntos trabajos forzados al Ministerio de Justicia para su enjuiciamiento. Las sanciones contra los empleadores que violaron las leyes de trabajo forzoso fueron insuficientes para disuadir las violaciones, en parte porque generalmente no se hicieron cumplir.

Algunos médicos que participan en el programa médico en el extranjero de Cuba informaron sobre evidencias de trabajo forzado, incluida la retención de documentos de viaje y de pago a los médicos, restringiendo así su movimiento, utilizando "cuidadores" para vigilarlos fuera del trabajo, amenazando con revocar las licencias médicas y tomar represalias contra sus familiares mediante la imposición de sanciones penales, exilio y separación familiar si abandonaban el programa o no regresaban a Cuba como lo indicaban a los supervisores del gobierno. Las autoridades no investigaron las denuncias de trabajo forzoso en el programa. Además, los médicos que abandonaron el programa informaron que los "cuidadores" cubanos los obligaron a adoctrinar a la población para que apoyara a la administración de Morales y a falsificar registros para inflar la cantidad de personas asistidas. El 14 de noviembre, la presidenta de transición, Áñez, anunció que el gobierno cubano había acordado retirar a 725 miembros del personal oficial cubano, muchos de los cuales participaron en el programa médico cubano en el extranjero.

Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de trata con fines sexuales y trabajo forzado en el servicio doméstico, la minería, la ganadería y la agricultura. Las poblaciones indígenas fueron especialmente vulnerables al trabajo forzoso en el sector agrícola y a oportunidades de empleo engañosas que pueden equivaler a trabajo forzoso en los países vecinos.

Consulte también el Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil. En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucionales varias

disposiciones en el Código Niño, Niña y Adolescente de 2014 que permitían a niños de hasta 10 años de edad trabajar. Luego, el presidente Morales firmó una ley en diciembre de 2018 para cambiar la edad mínima de trabajo de 10 a 14 años, de acuerdo con los estándares internacionales y con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo son responsables de identificar situaciones de trabajo infantil y trata de personas con fines de trabajo infantil forzoso. Cuando los inspectores sospechan de tales situaciones, remiten los casos a las oficinas municipales de defensoría de la niñez y adolescencia para una mayor investigación en coordinación con la fiscalía. La ley establece que el trabajo no debe interferir con el derecho del niño a la educación y no debe ser peligroso o insalubre. El trabajo peligroso y poco saludable incluye el trabajo en la cosecha de caña de azúcar y castaña, minería, fabricación de ladrillos, limpieza de hospitales, venta de bebidas alcohólicas y trabajo después de las 10 p.m., entre otras condiciones. Las oficinas municipales de defensoría de la niñez y adolescencia deben responder a una solicitud de permiso de trabajo para menores dentro de las 72 horas. El Ministerio de Trabajo es responsable de autorizar actividades laborales para adolescentes mayores de 14 años que trabajan para un empleador externo. Los gobiernos municipales, a través de sus respectivas oficinas de defensorías de la niñez y adolescencia, son responsables de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil, incluidas las leyes relativas a la edad mínima y las horas máximas para los niños trabajadores, los requisitos para completar la escuela y las condiciones de seguridad y salud para los niños en el lugar de trabajo. El Ministerio de Trabajo es responsable de identificar estos casos a través de inspecciones y remitirlos a las oficinas de las defensorías de la niñez y adolescencia.

El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley. El número de inspectores fue insuficiente para disuadir violaciones, aunque los funcionarios del Ministerio de Trabajo declararon que los inspectores realizaron investigaciones durante todo el año. Los funcionarios del ministerio no tenían estadísticas sobre el número de niños que habían retirado de situaciones peligrosas.

El ministerio colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo para implementar un programa que identifica y emplea a padres desempleados que tienen hijos en la fuerza laboral. Un funcionario del ministerio declaró que, si bien había varias razones por las cuales los niños de tan solo 10 años decidieron trabajar, una de las razones principales era porque sus padres no podían encontrar un empleo estable. Este programa buscó asegurar trabajos

para padres subempleados con la condición de que sus hijos dejaran de trabajar. El ministerio también proporcionó los salarios de los padres durante los primeros tres meses para evitar sobrecargar a las empresas que proporcionaron empleo.

El gobierno de Morales no hizo cumplir uniformemente la ley en todas las áreas, y el trabajo infantil continuó siendo un problema grave. Funcionarios gubernamentales admitieron casos de violaciones de trabajo infantil ocurridos en todo el país, especialmente en el sector minero. Las autoridades reconocieron que adolescentes de entre 15 y 17 años estaban trabajando en el sector minero sin regulación, porque era difícil para los inspectores detectar a estas personas en las minas, ya que realizaban inspecciones solo en el sector formal. En 2018, el gobierno estimó que 740.000 niños estaban empleados y que el 60 por ciento se dedicaba a realizar "trabajo familiar", ya sea en negocios familiares o junto a sus padres, en condiciones a menudo peligrosas.

Las autoridades no proporcionaron información detallada sobre las sanciones por violación de las leyes de trabajo infantil o la efectividad de tales sanciones, ni los tribunales procesaron a individuos por violaciones de la ley de trabajo infantil durante el año, aunque los inspectores del ministerio remitieron casos para su enjuiciamiento.

Entre las peores formas de trabajo infantil se encuentran los casos de niños que trabajan en la producción de ladrillos, la limpieza de hospitales, el trabajo doméstico, el transporte, la agricultura y la venta ambulante por la noche. Los niños también fueron objeto de trata sexual y otras formas de explotación sexual comercial. Un estudio de 2013 estimó que entre 3.000 y 4.000 niños y adolescentes trabajaron en la cosecha de castaña en el departamento de Beni; grupos indígenas confirmaron que la mayoría de estos niños eran indígenas. Los investigadores también descubrieron que algunos niños trabajaban en fábricas de procesamiento de castaña, incluso de noche.

Hubo poco progreso en el retiro de niños de las actividades mineras. Los medios informaron que menores de 14 años trabajaban en la fabricación de ladrillos en las ciudades de El Alto y Oruro, y sus padres a veces los hacían contratar por clientes que necesitaban ayuda para transportar ladrillos.

Vea también los hallazgos del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil en <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings>.

d. Discriminación con respecto al empleo y la ocupación

Las leyes y regulaciones laborales prohíben la discriminación con respecto al empleo y la ocupación por motivos de raza, sexo, género, discapacidad, religión, opinión política, nacionalidad o ciudadanía, idioma, orientación sexual o identidad de género, estado seropositivo u otras enfermedades transmisibles o estatus social. El gobierno de Morales no hizo cumplir efectivamente la ley en todos los sectores y se produjo discriminación con respecto al empleo y la ocupación. Las mujeres en cargos públicos enfrentaron altos niveles de violencia política y acoso. Líderes de la sociedad civil informaron sobre casos creíbles de discriminación laboral contra pueblos indígenas, mujeres, afrobolivianos, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTI. Los empleadores acusados de prácticas discriminatorias deben ofrecer restitución a los empleados afectados, pero no se informaron sobre casos de aquello.

ONU Mujeres informó en 2017 que las mujeres en el sector informal, en promedio, ganaron un 19 por ciento menos que sus homólogos masculinos. Las mujeres en el sector informal no estaban protegidas por las leyes laborales del sector formal, que ofrecen prestaciones de maternidad, horas de lactancia, permiso para trabajar menos horas y más vacaciones que sus homólogos masculinos. Según ONU Mujeres, los hombres del sector formal ganaban entre 1,5 y cuatro veces más que las mujeres por el mismo trabajo. Observadores críticos sostuvieron que estas leyes alentaron a las empresas a dar preferencia a los hombres en la contratación.

El ex Defensor del Pueblo del Departamento de Santa Cruz informó que muchas mujeres fueron despedidas debido a sus embarazos, lo que constituye una violación de la legislación laboral.

e. Condiciones aceptables de trabajo

El sueldo mínimo mensual fue mayor que el ingreso oficial de línea de pobreza del gobierno. A partir de abril, el Banco Mundial estimó que el 36 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. La ley establece una semana laboral máxima de 48 horas y limita la jornada laboral a ocho horas para los hombres. La ley también establece una semana laboral de 40 horas para las mujeres, prohíbe que las mujeres trabajen por la noche, exige períodos

de descanso y exige el pago de una prima por el trabajo más allá de una semana laboral estándar. La ley estipula un mínimo de 15 días de vacaciones anuales. El Ministerio de Trabajo establece estándares de seguridad y salud ocupacional y monitorea su cumplimiento. La ley exige que las normas se apliquen de manera uniforme a todas las industrias y sectores. El gobierno de Morales no hizo cumplir efectivamente la ley.

La oficina de seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero las normas pertinentes se aplicaron de manera deficiente. El número de inspectores fue insuficiente para proporcionar una inspección efectiva en el lugar de trabajo. La ley establece sanciones por incumplimiento, pero la aplicación no fue efectiva y las multas fueron insuficientes para disuadir las violaciones. Un comité tripartito nacional de representantes empresariales, laborales y gubernamentales es responsable de supervisar y mejorar las normas y la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Trabajo mantuvo oficinas para consultas de trabajadores, quejas e informes de prácticas laborales injustas y condiciones de trabajo inseguras, pero no estaba claro si las oficinas fueron efectivas para regular las condiciones de trabajo.

La ley prohíbe despedir a los empleados por retirarse de condiciones de trabajo que consideran peligrosas y establece que el Ministerio de Trabajo ordenará que sean recontratados después de una inspección.

Si bien el gobierno de Morales no mantuvo estadísticas oficiales, hubo informes de que trabajadores murieron debido a condiciones inseguras, particularmente en los sectores de minería y construcción. Expertos laborales estimaron que un promedio de cinco personas que trabajaban en la construcción en La Paz morían cada año; la mayoría fueron empleados por pequeñas empresas. No hubo esfuerzos significativos del gobierno para mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional. Las condiciones de trabajo en las minas operadas por cooperativas continuaron siendo malas. Los mineros trabajaron sin descanso programado durante largos períodos en condiciones peligrosas y poco saludables.

Los trabajadores en trabajos informales a tiempo parcial y por hora no tuvieron protección laboral. Muchas compañías y negocios preferían trabajadores contratados por hora o a tiempo parcial para evitar pagar los beneficios de maternidad y pensión requeridos. Según expertos en derecho laboral, el sector informal comprendía aproximadamente del 65 al 75 por ciento de la economía.

Afirmaron que las regulaciones laborales destinadas a proteger a los empleados en realidad promovieron el gran sector informal porque, según los informes, las empresas no contrataron empleados a tiempo completo debido a los mayores costos que conlleva su empleo.

Líderes de la sociedad civil y medios de comunicación informaron que las compañías chinas emplearon a trabajadores en condiciones deficientes. El 21 de abril, Yerko Núñez, entonces senador del Partido Unidad Demócrata, informó que un año después de que la empresa *China Railway Construction Company* se comprometiera a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, nada había cambiado. Afirmó que los trabajadores continuaron trabajando en un ambiente peligroso, fueron transportados en camiones de basura y, a menudo, no se les dio comida ni agua.

Varias ONG documentaron el creciente papel de las empresas chinas, que ampliaron su presencia en los sectores de la minería, hidrocarburos e infraestructura durante los 10 años anteriores. En 2017, la directora de CooperAccion, Julia Cuadros, declaró que esta expansión fue acompañada por una falta de respeto por las leyes laborales. Varias ONG señalaron que las empresas chinas importaron sus propios trabajadores y, por lo general, respetaron las leyes laborales chinas, que son menos estrictas que las leyes laborales bolivianas; según informes, el gobierno les permitió flexibilidad respecto al cumplimiento de las leyes nacionales.